81-PLA-EV-2024

**Ref. SICE:3182-2023**

24 de enero del 2024

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

Le remito el informe suscrito por la Inga. Elena Gabriela Picado González, Jefa a.i. del Subproceso de Evaluación, relacionado con los “*Lineamientos sobre Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto de la República*”, específicamente el *“Informe de Evaluación Anual de la Ejecución del Presupuesto 2023”* con el resultado de la evaluación realizada a los programas presupuestarios del Título 301 del Poder Judicial con corte al 31 de diciembre del 2023.

Se considera importante mencionar lo siguiente:

1. **Fuentes de financiamiento de recursos de la JUNAFO**

La Secretaría General de la Corte comunica el acuerdo tomado por el Consejo Superior, en sesión 07-2023 celebrada el 26 de enero del 2023, artículo XLVI, en donde se conoció el informe 48-PLA-EV-2023 y el de la sesión 15-2023 celebrada el 23 de febrero del 2023, artículo LXIII, donde se conoce el informe 1394-PLA-EV-2023, relacionado con la corrección del error material del informe 48-PLA-EV-2023, ambos relacionados con los *Lineamientos sobre Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto de la República*, específicamente el *“Informe de Evaluación Anual de la Ejecución del Presupuesto 2022” recomendó:*

*“Expuesto lo anterior y en virtud que por parte del Ministerio de Hacienda se remite el instrumento informe anual 2023, para la elaboración del presente informe, la Dirección de Planificación y los programas presupuestarios del Poder Judicial, se ajustaron a las instrucciones dadas en dicho instrumento , sin embargo, para la elaboración de futuros informes,* ***se le solicita muy respetuosamente al Ministerio de Hacienda, que se incorporen de forma separada, ambas fuentes de financiamiento del programa 951, las que provienen del patrimonio de la JUNAFO conforme lo dicta el artículo 239 y subsecuentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los recursos ordinarios, información que además se remite de esta manera por parte del Poder Judicial, en la etapa de formulación presupuestaria.***

La solicitud anterior se realiza, dado que, al considerarse ambas fuentes en una sola, existe una afectación directa en el cumplimiento del porcentaje de ejecución presupuestaria a nivel institucional, en el que se indicó un 95.14%, siendo lo correcto aproximadamente un 95.24%, considerando solamente la ejecución de recursos ordinarios del Poder Judicial.

En virtud de que el ajuste solicitado **no fue realizado por el Ministerio de Hacienda para el periodo en análisis**, se comunica lo siguiente:

La ejecución presupuestaria 2023 incluye el análisis del programa 951 “Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”, el cual tiene dos fuentes de financiamiento de recursos, en primer lugar, con **recursos correspondientes al patrimonio de la JUNAFO conforme lo dicta el artículo N° 239 y subsecuentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial**, por la suma de **₵1.740.599.140,00** y en segunda instancia, con recursos presupuestarios ordinarios del Poder Judicial por un monto de **₵541.896.850,00 (para remuneraciones).**  Considerando el monto total formulado por el Programa correspondió a ₵2.282.495.990,00, se logró una ejecución por la suma de ₵1.864.466.052,06, es decir, de un 81,69%.

Sin embargo, dado que el Ministerio de Hacienda limita el formato de cuadros para remitir la información, se procede a realizar la siguiente aclaración, por parte de la Dirección de Planificación, en relación con el programa 951:

**Cuadro 1 Ejecución financiera por fuente de financiamiento**

**Programa 951 Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial**

Al 31 de diciembre 2023

*(en millones de colones)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Fuente de financiamiento*** | ***Presupuestado*** | ***Ejecutado*** | ***Porcentaje de ejecución*** |
| *Patrimonio de la JUNAFO conforme lo dicta el artículo N.° 239 y subsecuentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial* | *1 740 599 140,00* | *1 331 621 229,46* | ***76,50%*** |
| *Recursos presupuestarios ordinarios del Poder Judicial (para Remuneraciones)* | *541 896 850,00* | *532 844 822,60* | ***98,33%*** |
| ***Total*** | ***2 282 495 990,00*** | ***1 864 466 052,06*** | ***81,69%*** |

**Fuente:** Elaboración propia de la Dirección de Planificación con información suministrada por JUNAFO.

Como se observa en el cuadro anterior, los recursos ordinarios para remuneraciones se ejecutaron un 98,33%, dado que los mismos corresponden a plazas ordinarias financiadas con recursos del Poder Judicial, mientras que la ejecución del presupuesto proveniente del Patrimonio de la JUNAFO fue del 76,50%.

A partir de lo anterior, al considerar únicamente el porcentaje de ejecución del presupuesto ordinario para este programa 951 del Poder Judicial del 98,33%; la ejecución presupuestaria del Poder Judicial sería del 94.98% y no del 94.92% según se indica en cuadro 5 de este informe, quedando de la siguiente forma:

**Cuadro 2. Ejecución del presupuesto por centro gestor**

Título 301 Poder Judicial

Al 31 de diciembre 2023

*(en millones de colones)*

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

**Fuente:** Elaboración propia de la Dirección de Planificación partiendo de los recursos ordinarios asignados al Poder Judicial.

Debido a lo anterior, se reitera muy respetuosamente al Ministerio de Hacienda que, para la elaboración de futuros informes se incorporen de forma separada ambas fuentes de financiamiento del programa 951, las que provienen del patrimonio de la JUNAFO conforme lo dicta el artículo 239 y subsecuentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los recursos ordinarios, información que además se remite de esta manera por parte del Poder Judicial, en la etapa de formulación presupuestaria.

La solicitud anterior se realiza, dado que, al considerarse ambas fuentes en una sola, existe una afectación directa en el cumplimiento del porcentaje de ejecución presupuestaria a nivel institucional, en el que se indicó un 94.92%, siendo lo correcto aproximadamente un 94.98%, considerando solamente la ejecución de recursos ordinarios del Poder Judicial.

1. **Seguimiento de oficio MH-DGPN-DG-OF-0494-2023 remitido por parte del Ministerio de Hacienda, relacionado con los Aspectos relevantes sobre el seguimiento presupuestario del primer semestre 2023**

En seguimiento al oficio MH-DGPN-DG-OF-0494-2023 remitido por parte del Ministerio de Hacienda, relacionado con los aspectos relevantes sobre el seguimiento presupuestario del primer semestre 2023, comunicado al Consejo Superior en oficio 1237-PLA-EV-2023, mismo conocido y aprobado por Consejo Superior en sesión 95-2023 celebrada el 14 de noviembre de 2023, artículo LII, se acordó:

***“…1.)*** *Tomar nota del informe de la Dirección de Planificación N° 1237-PLA-EV-2023 del 02 de noviembre de 2023, relacionado con los resultados del seguimiento realizado a los programas presupuestarios del Título 301 del Poder Judicial con corte al 30 de junio del 2023, para el Apartado Financiero y para el Apartado de Gestión, contenidos en el estudio realizado por la Dirección General de Presupuesto Nacional, en específico lo relacionado con el Poder Judicial.* ***2.)*** *Se insta a los encargados de los Programas Presupuestarios del Poder Judicial, valorar las recomendaciones señaladas en el informe de la Dirección General de Presupuesto Nacional, con el propósito de mejorar la gestión institucional.* ***3.)*** *Hacer este acuerdo de conocimiento de la Dirección Ejecutiva, Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, Administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones y Dirección de Planificación.* ***Se declara acuerdo firme…”***

En informe MH-DGPN-DG-OF-0494-2023 se recomendó lo siguiente:

**Apartado de Financiero**

1. *“…Adicionalmente, el informe institucional presenta acciones correctivas para mejorar la ejecución del presupuesto asignado para 2023, identificando, en cada Centro Gestor, los responsables de su cumplimiento, razón por la que* ***se recomienda dar un estricto seguimiento e informar sobre la efectividad de estas en el informe anual****…”*

Con la finalidad de dar cumplimiento a la recomendación, en el siguiente cuadro se detalla el cumplimiento de las acciones correctivas que hicieron los programas con la finalidad de mejorar la ejecución presupuestaria, es importante indicar que se consideran los programas que tuvieron una ejecución menor al 90,00% en el ejercicio presupuestario 2023;

***Cuadro 3 . Acciones correctivas que realizaron los programas con la finalidad de mejorar la ejecución presupuestaria***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Programa** | **Documento** | **Resultado** |
| 951 Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial |  | Como se muestra del total de 9 acciones correctivas el 75% se cumplen parcialmente y el 25% su cumplimiento es total.  Adicionalmente todas las acciones correctivas realizadas, contribuyeron al incremento en la ejecución presupuestaria al cierre del 31 de diciembre 2023 en comparación con el ejercicio de seguimiento 2023. |
| 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos |  | Como se muestra del total de 12 acciones correctivas el 100% se realizan o cumplen en su totalidad.  Adicionalmente todas las acciones correctivas realizadas, contribuyeron al incremento en la ejecución presupuestaria al cierre del 31 de diciembre 2023 en comparación con el ejercicio de seguimiento 2023. |
| 926 Dirección y Administración |  | Como se muestra del total de 17 acciones correctivas el 100% se realizan o cumplen en su totalidad.  Adicionalmente todas las acciones correctivas realizadas, contribuyeron al incremento en la ejecución presupuestaria al cierre del 31 de diciembre 2023 en comparación con el ejercicio de seguimiento 2023. |

1. *“…Asimismo, respecto a lo señalado sobre la entrada en vigor de la Ley de Contratación Pública 9986 y las dificultades que se le han presentado por atrasos en los inicios de los trámites de compra, la aplicación de nuevos lineamientos y la capacitación que reciben los centros gestores del Departamento de Proveeduría al mismo tiempo que inician los procesos de contratación. Al respecto,* ***se recomienda reforzar la asistencia a capacitaciones en el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y la nueva Ley de Contratación Pública para realizar las contrataciones conforme indica la normativa de forma oportuna****, con la finalidad de evitar devoluciones y atrasos innecesarios por parte del Departamento de Proveeduría y que en el segundo semestre del año se logren concretar los procesos de compra en trámite...”*

Con la finalidad de dar cumplimiento a la recomendación anterior me permito indicar las circulares emitidas por parte el Departamento de Proveeduría del Poder Judicial;

* Circular N° 87-2023, relacionada con Matrícula cursos SICOP, II Semestre 2023, comunicada a todas las personas funcionarias judiciales el 25 de mayo del 2023.
* Circular N° 122-2023, relacionada con Responsabilidad ante matrícula de los cursos de SICOP, comunicado a todas las personas funcionarias judiciales el 20 de julio de 2023.

A continuación, se detalla la cantidad de personas que concluyeron la capacitación por mes durante el segundo semestre del 2023;

***Cuadro 4. Cantidad de personas por mes que concluyeron la capacitación en el SICOP durante el segundo semestre del 2023.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Mes** | **Cantidad de personas que realizaron la capacitación** |
| Julio | 54  60 |
| Agosto | 168  94 |
| Septiembre | 60  59 |
| Octubre | 45  43 |
| Noviembre | 37  33 |
| Diciembre | 12 |
| **Total** | 376 |

***Fuente:*** *Reporte remitido por RACSA con el total de personas matriculadas en SICOP en el año 2023.En el cuadro se contemplan las personas que concluyeron el curso.*

**Apartado de Gestión**

Con respecto al apartado de gestión se emitió la siguiente recomendación:

*“…Algunas metas en particular alcanzaron un cumplimiento mayor a un 100,00%, por lo que* ***se recomienda para estos casos particulares que se realice una revisión de las metas, con el fin de determinar si su logro se debe a la subvaloración de las metas establecidas y se propongan metas que presenten retos para la organización****…”*

Se informa que los programas presupuestarios con porcentajes de cumplimiento mayor al 100% analizarán los parámetros definidos en el primer semestre del 2024, conforme a los plazos emitidos por parte del Ministerio de Hacienda (Conforme al oficio 116-PLA-PP-2023 en que se comunicó a los programas la fecha para reprogramación presupuestaria, misma que corresponde a 15 abril 2024).

Expuesto lo anterior y en virtud que por parte del Ministerio de Hacienda se remite el instrumento informe anual 2023, para la elaboración del presente informe, la Dirección de Planificación y los programas presupuestarios del Poder Judicial, se ajustaron a las instrucciones dadas en dicho instrumento.

Cabe señalar que, **una vez conocido y aprobado este informe por el Consejo Superior, debe ser firmado por el Presidente de la Corte y remitirse a la Dirección General de Presupuesto Nacional, con copia a la Contraloría General de la República, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República, al siguiente correo electrónico:** [notifica\_presupuesto\_nacional@hacienda.go.cr](mailto:notifica_presupuesto_nacional@hacienda.go.cr)

**El plazo máximo de presentación ante el Ministerio de Hacienda es el lunes 31 de enero del 2024.**

Atentamente,

***Allan Pow Hing Cordero***

***Director de Planificación***

***Erick Antonio Mora Leiva, Jefe***

***Proceso Planeación y Evaluación***

Copias:

* Dirección Ejecutiva
* Organismo de Investigación Judicial
* Ministerio Público
* Defensa Pública
* Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos
* Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional
* Centro de Conciliación del Poder Judicial
* Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial
* Archivo

hca

Ref.**3182-2023**

24 de enero del 2024

***Ingeniero***

***Allan Pow Hing Cordero***

***Director de Planificación***

***Máster***

***Erick Antonio Mora Leiva, Jefe***

***Proceso Planeación y Evaluación***

Estimados señores:

Con fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), Ley 8131, referentes a la evaluación de los resultados de la gestión institucional para garantizar, tanto el cumplimiento de objetivos y metas, como del uso racional de los recursos públicos y la presentación de informes periódicos para tales fines, se solicita el *“Informe de Evaluación Anual de la Ejecución del Presupuesto 2023”*. Al respecto, les remito el informe con el resultado de la evaluación realizada a los programas presupuestarios del Título 301 Poder Judicial con corte al 31 de diciembre del 2023, atendiendo la metodología incorporada en el instrumento suministrado por la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda.

Se adjuntan los archivos en formato PDF, que remitieron los encargados de los distintos programas institucionales en el apartado 4 Anexos.

Se adjunta documento en Excel con el apartado Financiero debidamente completadas y firmado, con base en los datos de liquidación presupuestaria suministrados por el Ministerio de Hacienda.

Atentamente,

***Ing. Elena Gabriela Picado Gonzalez, Jefa a.i.***

***Subproceso de Evaluación***

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2023

PODER JUDICIAL

ENERO 2024

Contenido

[1. Análisis Institucional 13](#_Toc156817933)

[2. Apartado Financiero 14](#_Toc156817934)

[2.1 Ejecución del Presupuesto institucional 2023 asociado a recursos internos 14](#_Toc156817935)

[2.2 Factores que incidieron en el Nivel de Ejecución 22](#_Toc156817936)

[2.3 Acciones de Dirección, Coordinación y Vigilancia sobre Transferencias a Instituciones Descentralizadas y los Órganos Desconcentrados de estas. 25](#_Toc156817937)

[3. Apartado de Gestión: Centro Gestor 29](#_Toc156817938)

[3.1 Análisis de los logros obtenidos 29](#_Toc156817939)

[3.1.1 Análisis los resultados de las unidades de medida de los productos 39](#_Toc156817940)

[3.1.2 Análisis de los resultados de los Indicadores 45](#_Toc156817941)

[4. Anexos 57](#_Toc156817942)

## **Análisis Institucional**

El Plan Estratégico Institucional 2019-2024 del Poder Judicial está orientado a resultados y carácter estratégico que permite a la jerarquía institucional conocer, gestionar y tomar decisiones estratégicas, que tengan incidencia directa en los niveles tácticos y operativos de la institución, para el mejoramiento de la administración de justicia, tal como se establece en la misión de este Poder de la República, “Administrar justicia pronta, cumplida y accesible, de conformidad con el ordenamiento jurídico para contribuir con la paz social, el desarrollo integral y sostenible del país”. Además, formula políticas institucionales que apoyan y fortalecen la labor del Poder Judicial en su accionar diario relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible (agenda 2030) y sus objetivos estratégicos relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo.

Al cierre del periodo 2023 el Poder Judicial tuvo una ejecución óptima del 94,92% a pesar de los factores externos presentados durante el período presupuestario, tales como la implementación del uso de la herramienta Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en las contrataciones, la entrada en vigencia de la Ley de Contratación Pública No.9986, la aplicación de la Ley de Empleo Público, así como el plazo en la aprobación de los presupuestos extraordinarios durante el año que afectaron la pronta ejecución de los recursos. Este porcentaje de ejecución óptimo es producto del esfuerzo que se realiza en cada período presupuestario, para ejecutar los recursos de forma transparente, eficiente, eficaz y oportuna, y que contribuye de manera positiva al Plan Estratégico Institucional para la obtención de las metas y objetivos propuestos por la Institución.

## **Apartado Financiero**

## Ejecución del Presupuesto institucional 2023 asociado a recursos internos

A continuación, se presenta la ejecución financiera por objeto de gasto y por centro gestor de los ejercicios presupuestario 2022 y del 2023.

**Cuadro 5. Ejecución financiera institucional por clasificación objeto del gasto 1**

Poder Judicial

Al 31 de diciembre de 2022 y 2023

(en millones de colones)



**Fuente:** Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (2022 y Liquidación Preliminar 2023) y Módulo Presupuestario de Poderes (2023 Liquidación Preliminar).

1/ Corresponde a recursos de fuentes internas de financiamiento.

2/ En SIGAF esta columna se denomina Presupuesto actual. En el caso de los datos al cierre del ejercicio al 31/12/2023, comprenden el presupuesto inicial y las modificaciones realizadas durante el 2022 y 2023.

3/ Se refiere al devengado, que consiste en el reconocimiento del gasto por la recepción a conformidad, por parte del órgano respectivo, de cualquier clase de bien y servicios contratados o consumidos, durante el ejercicio económico, independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.

1. Breve análisis comparativo entre 2022 y 2023.

El Poder Judicial realiza un esfuerzo constante para ejecutar los recursos asignados de forma transparente, eficiente, eficaz y oportuna, para lo cual se realizan valoraciones y estimaciones constantes de los rubros más importantes en el presupuesto con el fin de satisfacer oportunamente todas las necesidades de los diferentes programas que se ejecutan, así como atender las necesidades urgentes que se presentan en cada período presupuestario y además, realizar el análisis correspondiente para la toma de decisiones acertadas.

El porcentaje de ejecución del Poder Judicial al 31 de diciembre 2023 fue de 94,92% que corresponde a un 0,22% menos en comparación con la ejecución al 31 de diciembre 2022. Si bien la diferencia no es tan significativa; resulta de importancia señalar que la entrada en vigor de la Ley de Contratación Pública No.9986 y uso de la herramienta Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) afectó la ejecución de los recursos, originando atrasos en los inicios de los trámites de compra por la aplicación de los nuevos lineamientos en las contrataciones y la tramitología que conllevan los procesos de contratación. Como parte de la implementación de la nueva legislación, fue necesario construir una gran cantidad de guías para facilitar el trabajo de las oficinas usuarias, así como desarrollar procesos de capacitación y acompañamiento lo que conllevó a que el fuerte de las contrataciones se recibiera en el segundo semestre por lo que el monto de los compromisos no devengados aumentó.

Además, la ejecución se ha visto afectada en las contrataciones en moneda extranjera, por cuanto el tipo de cambio tendió a la baja en el año 2023, lo que ocasionó que no se ejecutaran la totalidad de los recursos formulados; así como el envío tardío de las facturas por parte de los proveedores al cierre del periodo presupuestario 2023 lo que también incidió en que muchas contrataciones se conviertan en compromiso no devengado y se ejecuten los recursos luego de finalizado el periodo corriente.

Asimismo, el cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la norma de ejecución de la Ley de Presupuestos Públicos para el periodo 2023, al no permitir traslados entre partidas en los decretos ejecutivos conlleva a que no se puedan redireccionar los recursos de manera eficiente y oportuna, teniendo que esperar meses para que se concreten los procesos legislativos.

A pesar de los obstáculos señalados, el Poder Judicial realizó el seguimiento continuo de sus recursos con el fin de obtener una ejecución óptima y cumplir con las metas y objetivos institucionales.

1. Indicar cómo incidieron los presupuestos extraordinarios y cada una las modificaciones legislativas y ejecutivas realizadas en el porcentaje de ejecución durante el período, enfatizando si hubo necesidad de realizar múltiples ajustes por estas vías y como estos ajustes incidieron en la programación inicial realizada.

El Poder Judicial tramita las modificaciones ejecutivas de acuerdo con el cronograma establecido en los lineamientos técnicos sobre el Presupuesto de la República del Ministerio de Hacienda; así como los presupuestos extraordinarios de acuerdo con las fechas establecidas por la Dirección General de Presupuesto Nacional; no obstante, la aprobación tardía de estos trámites afecta considerablemente la ejecución de los recursos.

Para el periodo 2023 se tramitaron tres modificaciones por decreto en las partidas de remuneraciones para cubrir necesidades producto del cambio en el salario base de los puestos que se trasladarán al modelo de salario global, según lo dispuesto en la Ley Marco de Empleo Público, de las cuales el H-17 se presentó el 06 de julio, 2023 y fue aprobado por el Ministerio de Hacienda el 06 de setiembre, 2023; el decreto H-18 fue presentado el 01 de setiembre; sin embargo, fue desaprobado por ese Ministerio mediante Circular MH-DGPN-DG-CIR-0014-2023 del 13 de octubre 2023 y no hubo necesidades de tramitar el tercer decreto para este fin.

Por otro lado, se tramitaron 5 presupuestos extraordinarios para atender diferentes necesidades institucionales, el primer presupuesto extraordinario H-10 fue presentado ante el Ministerio de Hacienda el 28 de febrero, 2023 y fue aprobado hasta el 26 de julio 2023 por la Asamblea Legislativa mediante ley No.10370.

Los presupuestos extraordinarios No. 02-2023, 03-2023 y 04-2023 se presentaron al Ministerio de Hacienda el 11 de julio 2023, 26 de julio 2023 y 09 de agosto 2023 respectivamente; sin embargo, dicho Ministerio tramitó esos presupuestos extraordinarios en un mismo proyecto, el H-12 y fueron aprobados hasta el 01 de noviembre, 2023, esta aprobación tardía ocasionó atrasos en la ejecución presupuestaria.

También se tramitó el presupuesto extraordinario H-22 y se presentó el 22 de setiembre 2023, el mismo fue aprobado mediante decreto No.10406 el 08 diciembre 2023.

Como se puede observar anteriormente, las fechas de aprobación de los presupuestos extraordinarios afecta la ejecución del Poder Judicial debido a que traslada recursos que requieren un trámite de contratación complejo. Esta demora en la aprobación de los presupuestos extraordinarios dificulta considerablemente la ejecución de los recursos asignados al Poder Judicial, ya que se ven limitados en su capacidad para llevar a cabo las contrataciones y trámites necesarios para utilizar esos recursos de manera eficiente y ágil.

**Cuadro 6. Ejecución del presupuesto por centro gestor**

Poder Judicial

Al 31 de diciembre 2023

(en millones de colones)



**Fuente**: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.

1/ En SIGAF esta columna se denomina Presupuesto actual, En el caso de los datos al cierre del ejercicio al 31/12/2023, comprenden el presupuesto inicial y las modificaciones realizadas durante el 2022 y 2023.

2/ Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.

3/Corresponde al porcentaje de presupuesto ejecutado con respecto al presupuesto actual.

Como se mencionó anteriormente, el Poder Judicial obtuvo una ejecución óptima de sus recursos de 94,92%, de los cuales solamente los programas 926 Dirección y Administración, 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos y 951 Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial obtuvieron una ejecución menor al 90%.

La ejecución de la partida 1 “Servicios” muestra una ejecución de 85,69%. Esta partida tiene asignados recursos importantes para atender el pago de servicios públicos de la Institución y los contratos a nivel institucional tal como los alquileres de edificios, mantenimientos de edificios y oficinas, mantenimiento de diferentes equipos de la institución UPS, ascensores, aires acondicionados, entre otros y servicio de limpieza y vigilancia.

Asimismo, en esta partida se ejecutan recursos para atender el pago de viáticos tanto del interior como del exterior, transporte, tiquetes aéreos, capacitaciones, actividades protocolarias a los servidores judiciales; mantenimiento de equipos y vehículos institucionales, servicio de fumigación; pagos de renovación de firmas electrónicas para brindar servicio eficiente y oportuno.

La partida 2 “Materiales y Suministros” muestra un porcentaje de ejecución del 76,30% los cuales se utilizaron para atender las contrataciones según demanda para compra de repuestos originales para los vehículos oficiales del Poder Judicial, productos de limpieza, servicio de alimentación de detenidos, compra de tóner y productos de papel, entre otros. Las contrataciones según demanda se ejecutan de acuerdo con las necesidades de las diferentes oficinas durante el periodo presupuestario y con base en los cronogramas de compras e inventario disponibles en bodegas, según las gestiones que realice el Proceso de Bienes del Departamento de Proveeduría para el caso de inventario, de las cuales varias están pendientes de ingreso y en proceso de trámite.

En la partida 5 “Bienes Duraderos” se obtuvo una ejecución del 59,01%, en esta partida se ejecutan los proyectos de gran impacto para el Poder Judicial, tales como mejoras en los edificios, compra de vehículos, equipo tecnológico, licencias, equipo y mobiliario de oficina y diferentes activos necesarios para la institución.

La partida 9 “Cuentas Especiales” muestra una ejecución del 59,08%, esta partida tiene la particularidad de que su ejecución depende de las investigaciones que se van presentando día con día, para el año 2023 debido a la Ley de Crimen Organizado el gasto incrementó en esa partida; sin embargo, el equipo de trabajo de esa dependencia no se ha conformado al 100% lo que implicó que la demanda en las investigaciones no se requirió en su totalidad.

El porcentaje de ejecución menor al 90% en las partidas anteriores, corresponde a problemas relacionados con el proceso de contratación administrativa producto de la entrada en vigencia de la Ley de Contratación Pública No.9986, así como cambios en el sistema de compras públicas SICOP, donde se deben atender nuevos requerimientos como oficios de decisión inicial, estudios de mercado con respecto a SICOP, justificaciones de estudio de mercado, además la aprobación tardía de los presupuestos extraordinarios por parte del Ministerio de Hacienda afectan la pronta ejecución de los recursos; entre otros. Asimismo, como se mencionó anteriormente, la norma de ejecución No. 7 de la Ley de Presupuestos Públicos para el periodo 2023, al no permitir traslados entre partidas en los decretos ejecutivos conlleva a que no se puedan redireccionar los recursos de manera más eficiente y oportuna. Específicamente en la partida “Bienes Duraderos”, la baja ejecución se da porque el proyecto que tiene asignado la mayor cantidad de recursos, sea la Construcción de una Torre Anexa en San Ramón y el acondicionamiento eléctrico del edificio principal consumió más tiempo del previsto en su trámites, especialmente en el proceso de visado del contrato por parte de la Contraloría General de la República.

Además, el tipo de cambio para el año 2023 afectó considerablemente los recursos formulados para las contrataciones en moneda extranjera, dado que las compras o servicios se cancelaban a un costo menor a los planificado.

En el siguiente cuadro se muestra la información de los compromisos no devengados por partida 2022 durante el 2023.

**Cuadro 7. Compromisos no Devengados 2022**

Poder Judicial

Al 31 de diciembre de 2023

(en millones de colones y porcentajes)



|  |
| --- |
| **Fuente:** Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera y Módulo Presupuestario de Poderes al (31/12/2023). |
| 1/ Corresponde a recursos de fuentes internas de financiamiento.  2/ Corresponde al monto certificado por la Contabilidad Nacional de los compromisos no devengados (CND) del 2022. |

La institución a través de la Dirección Ejecutiva y sus departamentos adscritos monitorea de manera continua la ejecución oportuna de los documentos presupuestarios correspondientes a los compromisos, así como la agilidad en las contrataciones para evitar compromisos no devengados en el siguiente año. A pesar de este seguimiento constante y diligencias en los trámites, algunos compromisos no devengados surgen debido a plazos de contratación, plazos de entrega de proyectos y equipos especializados, los cuales es inevitable que se mantengan como compromisos para el siguiente año.

Estos compromisos no devengados impactan significativamente la ejecución del año 2023 y afectan la planificación de adquisiciones presupuestadas; sin embargo, la mayoría de estos compromisos resultan de factores externos, como facturas por compras que no ingresaron al cierre del año 2022, siendo entregadas por proveedores después de las fechas establecidas.

La planificación de compras se ve directamente afectada por la presencia de compromisos no devengados, ya que en muchos casos se requiere una modificación presupuestaria para reponer los recursos que se destinaron para suplirlos y poder atender las necesidades que estaban formuladas, aunado a que la demora en la aprobación de esta modificación afecta la ejecución en tiempos oportunos por parte de los encargados del presupuesto.

Asimismo, la Institución se vio obligada a aplicar numerosos caducos a los compromisos no devengados 2022 debido a la baja en el tipo de cambio que afecta a las contrataciones en moneda extranjera, como las relacionadas en la adquisición de vehículos, bienes intangibles, entre otros.

Se realiza un seguimiento constante y coordinación con el Departamento de Proveeduría y Centros Gestores para caducar oportunamente estos saldos excedentes en los documentos presupuestarios al cierre presupuestario.

También en los casos de la partida 5, debido a su naturaleza y por el nivel de complejidad de la contratación y de los proyectos como tal, los plazos de entrega son amplios por lo que muchas contrataciones quedan como compromisos no devengados a pesar del seguimiento constante para su ejecución oportuna.

Adicionalmente, la institución se ve en la necesidad de establecer fechas límite en el mes de diciembre para la presentación de los diferentes trámites de ejecución de presupuesto producto del cierre presupuestario, lo que impide ajustes a documentos después de las fechas establecidas, debiendo ajustarse a los trámites en el Módulo de Poderes que corresponde al sistema oficial para registrar el presupuesto y sus movimientos ante el Ministerio de Hacienda, por lo que no se pueden realizar ajustes presupuestarios (caducos) a los documentos después de las fechas señaladas; varios documentos que quedan como compromisos no devengados son caducados a inicios del primer trimestre 2023 al ya haberse cancelado la factura, corresponder a sobrante en el saldo del documento.

2.2 Factores que incidieron en el Nivel de Ejecución

A continuación, se presentan los factores[[1]](#footnote-2) que incidieron en la ejecución de la institución por centro gestor que tuvieron una ejecución menor al 90,00% en el ejercicio presupuestario 2023.

**Cuadro 8. Factores que incidieron en la ejecución del presupuesto por centro gestor**

Poder Judicial

Al 31 de diciembre 2023

**Fuente**: Elaboración propia con información proporcionada por los centros gestores.

* Para el caso del programa 926 Dirección y Administración los siguientes factores afectaron la correcta ejecución de los recursos en las partidas 1 “Servicios”, 2 “Materiales y Suministros” y 5 “Bienes Duraderos”:

Factor 4 “Variación en la estimación de los recursos”, debido a que el presupuesto se formula con 2 años de anticipación y sobre una estimación de lo que se va a requerir, por lo que, en el periodo de ejecución se presenta una diferencia entre lo estimado y lo real ejecutado. Asimismo, en algunos casos, las contrataciones de los recursos presupuestados fueron más altos de lo requerido por lo que al no poderse concretar la compra, se deben trasladar para atender otras necesidades institucionales de mayor urgencia; además, algunas compras se adjudicaron por un precio menor al reflejado en el estudio de mercado, lo que incide considerablemente en la ejecución del presupuesto 2023.

Factor 5 “Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa”; la implementación del uso de la herramienta SICOP y entrada en vigor de la Ley de Contratación Pública No.9986 conlleva a realizar más tramitología y dificulta la oportuna ejecución de los recursos.

Factor 6 “Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado”, la formulación del presupuesto se realiza dos años antes a su ejecución, por lo que en algunos casos se realiza una planificación de acuerdo con el gasto en el año en que se formulan los recursos, por lo que al momento de ejecutarlos el monto requerido es menor a lo planificado, asimismo de un periodo a otro las necesidades y prioridades institucionales tienden a cambiar.

Factor 7 “Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2023”, la norma de ejecución No.07 de la Ley de Presupuesto 10.331 que señala que no se puede destinar recursos entre partidas impacta de manera importante al Poder Judicial dada la limitante para la oportuna ejecución del presupuesto institucional, ocasionando la imposibilidad de movimientos e inflexibilidad para actuar de forma oportuna.

Factor 9 “Otros”, la particularidad vivida en este periodo con la tendencia a la baja del tipo de cambio del dólar con respecto a la monera nacional (colón) incidió en la ejecución de las contrataciones adjudicadas en esa moneda, lo que ocasionó una afectación en los recursos asignados; asimismo, la aprobación tardía de los presupuestos extraordinarios afectó la ejecución oportuna de los recursos.

* Para el programa 950 los siguientes son los factores que afectaron su correcta ejecución presupuestaria en las partidas 1 “Servicios”, 2 “Materiales y Suministros” y 5 “Bienes Duraderos”:

Factor 4 “Variación en la estimación de los recursos”, se presentó una variación en los recursos asignados debido a que algunas compras se adjudicaron por un precio menor al estimado en el estudio de mercado.

Factor 5 “Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa”, la implementación del uso de la herramienta SICOP y entrada en vigor de la Ley de Contratación Pública No.9986 conlleva a realizar más procesos de tramitología y dificulta la oportuna ejecución de los recursos.

Factor 6 “Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado”, la formulación del presupuesto se realiza dos años antes a su ejecución, por lo que en algunos casos se realiza una planificación de acuerdo con el gasto en el año en que se formulan los recursos y al momento de ejecutarlos el monto requerido es menor a lo planificado, asimismo de un periodo a otro las necesidades y prioridades institucionales tienden a cambiar. Además, debido al traslado al nuevo local de Puntarenas para el año 2023 producto del uso del Fideicomiso no se realizaron varias compras que se tenían contempladas en ese periodo.

Factor 9 “Otros”, La ejecución depende de las necesidades de las personas usuarias por la cantidad de casos y tipo de casos que ingresen para atención y protección.

* Para el programa 951 los siguientes factores afectaron la correcta ejecución de los recursos en las partidas 1 “Servicios”, 2 “Materiales y Suministros” y 5 “Bienes Duraderos”:

Factor 4 “Variación en la estimación de los recursos”, se presenta este factor debido a las variaciones en el costo del servicio de supervisión por parte del Ente Regulador (SUPEN), el costo de los servicios por proyecciones de tipo de cambio (disminución del tipo de cambio), reducción en las tarifas de las pólizas de seguro (responsabilidad civil) y descuentos por parte de los proveedores en servicios de capacitación.

Factor 5 “Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa”, la implementación del uso de la herramienta SICOP y entrada en vigor de la Ley de Contratación Pública No.9986 conlleva a realizar más procesos de tramitología y dificulta la oportuna ejecución de los recursos.

Factor 6 “Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado”, se presenta este factor por las decisiones del Órgano Máximo de Dirección que permitieron atender servicios jurídicos con el personal de su brazo administrativo, y la cancelación de servicios por parte de proveedores como capacitaciones; así como la variación en la estimación mensual de los recursos por la implementación de sesiones virtuales del Órgano Máximo de Dirección y las desviaciones entre los plazos programados de adjudicación de las contrataciones.

Factor 9 “Otros”, se presenta este factor por la imposibilidad de trasladar recursos a otros centros gestores.

2.3 Acciones de Dirección, Coordinación y Vigilancia sobre Transferencias a Instituciones Descentralizadas y los Órganos Desconcentrados de estas.

El siguiente cuadro muestra las Transferencias que el Poder Judicial, realiza a las instituciones descentralizadas y los órganos desconcentrados de estas, así como las acciones de dirección, coordinación y vigilancia que se realiza en cada una de ellas.

**Cuadro 9. Transferencias a instituciones descentralizadas y los órganos desconcentrados de estas, acciones de dirección, coordinación y vigilancia**

**Poder Judicial**

Al 31 de diciembre 2023

*(en millones de colones)*

**Fuente***:* Liquidación presupuestaria del Sistema Módulo Presupuestario de Poderes al (31/12/2023).

**Normas de ejecución**

**Cumplimiento de la norma de ejecución 20**

El siguiente cuadro incluye los recursos de capital que la entidad tiene asociados a proyectos de inversión, tales como Sostenibilidad de la Plataforma Tecnológica, Construcción de barrera protectora contra infiltraciones de la azotea del edificio de Tribunales de San José, Torre Anexa y Reacondicionamiento Eléctrico Edificio III Circuito Judicial Alajuela, Ley de Personerías Jurídicas, Sustitución del sistema de detección y supresión de incendios del edificio del Departamento de Ciencias Forenses, Renovación de la flotilla vehicular del Poder Judicial, entre otros.

**Cuadro 10. Gasto de capital/1 asociado a proyectos de inversión**

301 Poder Judicial

Al 31 de diciembre 2023

*(en millones de colones)*

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

**Fuente**: Centros Gestores responsables de los proyectos de inversión.

/1 Se exceptúan las transferencias a las municipalidades y los concejos municipales de distrito.

**Cuadro 11. Proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública /1**

301 Poder Judicial

Al 31 de diciembre 2023

Imagen que contiene Diagrama

Descripción generada automáticamente (en millones de colones)

**Fuente**: Datos suministrados por la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, conforme información incluida en el Banco de Proyectos de Inversión Pública y actualizado al 31 diciembre del 2023.

/1: Corresponde a proyectos registrados en el BPIP con recursos de la ley 10331 y sus reformas.

Con respecto a los cuadros 10 y 11, a continuación, se adjunta el detalle de los proyectos que se encuentran dentro del Banco de Proyectos del Poder Judicial, correspondientes a los proyectos de inversión relacionados con la partida 5 y 7 para cumplir con la norma 20:



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datos | Director (a) Financiero (a) | Director (a) de Planificación |
| Nombre | Ana Eugenia Romero Jenkins | Allan Pow Hing Cordero |
| que Correo electrónico | [aromeroj@poder-judicial.go.cr](mailto:aromeroj@poder-judicial.go.cr) | apowhing@poder-judicial.go.cr |
| Número de teléfono | 2295-4971 | 2295-3600 |
| Firma Digital |  |  |

## **Apartado de Gestión: Centro Gestor**

## Análisis de los logros obtenidos

1. **Comentar ¿cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional?**

**Programa 926:**

El Poder Judicial realizó un esfuerzo considerable en el periodo 2023 para lograr de manera eficiente cumplir con las metas institucionales y lograr una justicia pronta, cumplida y accesible para la población nacional a pesar de los diferentes factores externos presentados durante el periodo presupuestario, ello se demuestra en el nivel de ejecución institucional que superó el 90%.

**Programa 927:**

En el caso del Poder Judicial, la misión institucional definida en el plan estratégico 2019-2024 corresponde a: “Administrar justicia pronta, cumplida y accesible, de conformidad con el ordenamiento jurídico para contribuir con la democracia, la paz social y el desarrollo sostenible del país”.

El contenido presupuestario asignado para el año 2023, específicamente al Programa 927 “Servicio Jurisdiccional”, le permitió a las oficinas y despachos que lo conforman, ejercer su labor acorde con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política, al superar la expectativa de asuntos finalizados durante el 2023.

La implementación de las reformas en las materias civil y laboral; los planes de descongestionamiento para la implementación de los códigos procesales para las materias agraria y familia, así como el Proyecto de Rediseño de Procesos del Modelo Penal con la aplicación de nuevas tecnologías de información, contribuyeron a ese fin.

Para el año 2023 los despachos jurisdiccionales retornaron a la “normalidad”, en un contexto laboral similar al que vivía previo a la pandemia; sin embargo, se mantuvieron algunas de las acciones enfocadas en propiciar la continuidad del servicio en el contexto del COVID 19, entre las que se destacar:

* Continuidad de la modalidad de teletrabajo bajo un esquema de contrato formal, con pautas, deberes y responsabilidades tanto de la parte empleadora, como para el funcionario.
* Continuidad en el uso de las licencias necesarias para teletrabajar.
* Seguimiento y control de la gestión realizada por los despachos.
* Utilización de los protocolos para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos en diferentes materias.

Finalmente, los resultados obtenidos por el programa 927 mostraron un comportamiento positivo durante el año 2023, en relación con las metas establecidas para dicho periodo, para mantener y ejecutar de la mejor manera los ideales plasmados en la misión institucional.

**Programa 928:**

***Misión del Poder Judicial***

*“Administrar justicia pronta, cumplida y accesible, de conformidad con el ordenamiento jurídico para contribuir con la democracia, la paz social y el desarrollo sostenible del país.”*

La gestión presupuestaria es uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo la labor de este Organismo. A través de la ejecución se logra dotar desde los consumibles tangibles hasta los bines intangibles para el adecuado funcionamiento de la Policía Judicial. Es importante indicar que al ser una policía técnica, científica y administrativa se deben procurar todos los elementos esenciales para el logro de objetivos. Es así como se logró atender todo lo referente a la logística policial, a través de:

* La atención del pago de viáticos.
* Los vehículos, su mantenimiento, combustible y repuestos.
* Los equipos médicos y su mantenimiento.
* Los diferentes contratos como los de alimentación de detenidos, calibraciones de equipos entre otros.
* Software como adquisición de software para apertura de celulares, y 471 computadoras.
* Proyectos constructivos como el trámite de una bodega de reactivos.
* Toda la atención de gastos confidenciales para las diferentes investigaciones.
* Equipo policial, como la adquisición de 981 chalecos antibalas, 350 pistolas, 80 cascos de kevlar, munición, entre otros.

Todo lo anterior permite que la Policía Judicial pueda atender de manera eficiente las diferentes investigaciones que se van presentando y principalmente permiten trazar dichas investigaciones con toda la transparencia requerida.

Adicionalmente se incorporaron recursos para la ley contra el Crimen Organizado, lo que garantiza que la policía judicial pueda atender de manera más expedita los casos relacionados a esta materia, la cual ha venido en aumento y que está causando un daño a la sociedad costarricense, por lo anterior el contar con mayor presencia policial y que esta a su vez tenga la capacidad técnica y operativa para atender este tipo de delito, trae beneficios al país, brindando un mayor nivel de seguridad y pronta atención de los casos.

**Para el Programa 929:**

La gestión desarrollada por el programa 929, contribuyó de diferentes formas con la misión institucional de brindar una justicia pronta y cumplida, ya que el Ministerio Público tiene la función de requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública.

En el marco de la Política de Acceso a la Justicia, el Ministerio Público de Costa Rica cumple con su compromiso de garantizar sus servicios a toda la población y para ello cuenta con una plataforma de Fiscalías Especializadas, Políticas de Persecución Penal, directrices internas, y la capacitación continua del personal técnico y profesional, permitiendo brindar un servicio público de calidad a todos los grupos vulnerables y poblaciones vulnerabilizadas. Entre las políticas establecidas por el Ministerio Público para una mejora en el servicio brindado a estas poblaciones, están la Política de Persecución Penal para Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia, la Política de Persecución Penal para Personas en condición de discapacidad y la Política de persecución penal para la atención de Delitos en perjuicio de personas menores de edad.

También es importante señalar que, como parte de la labor de proyección institucional se continua con el plan Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas en el Ministerio Público, el cual busca la cercanía con la ciudadanía a nivel nacional. Además, se mantiene una actualización constante de la página web, así como de la página en Facebook del Ministerio Público, con el fin de mantener un contacto más directo con la ciudadanía y lograr mayor acercamiento para que la población pueda tener acceso a la información relacionada con el quehacer diario del Ministerio Público.

En adición lo mencionado, y en procura de brindar un mejor servicio a las personas usuarias y mejorar las condiciones para los y las colaboradoras, durante el año 2023 se concluyeron las obras de remodelación de los espacios que albergan las oficinas 1218 - Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, oficina 0622 - Fiscalía Adjunta Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos y 1220 - Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, 0994 - Fiscalía Adjunta Contra La Violencia de Género y la remodelación del espacio que alberga la oficina 1981 - Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), en el IV piso del edificio de Tribunales del I Circuito Judicial de San José.

Asimismo, se gestionó el equipamiento de la oficina 1981 - Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada, y se gestionó la compra de diversos equipos necesarios en las diferentes oficinas del Ministerio Público, que permitirán resolver los casos de manera eficiente y eficaz, garantizando el acceso a la justicia.

Por otra parte, se procuró brindar un servicio púbico de calidad al desarrollarse diversas acciones para el fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y destrezas de las personas funcionarias del Ministerio Púbico en diversos aspectos, que a su vez permiten una mejor atención a las personas usuarias del Poder Judicial.

**Programa 930:**

*Misión:*

*“Proveer defensa pública con excelencia, solidaridad y compromiso a todas las personas usuarias, contribuyendo a garantizar la plena vigencia de los derechos, libertades, garantías e intereses de estas personas, en forma ágil y oportuna, en los procesos judiciales que nos han sido legalmente asignados”.*

La gestión desarrollada impacta directamente el servicio que brinda la institución, que está orientado especialmente a la atención de poblaciones vulnerables, que encuentra en la Defensa Pública la posibilidad de contar con asistencia letrada para enfrentar un proceso judicial. Cada persona usuaria es particular en la atención de su caso, por tanto, recibe un servicio individualizado que permite a la persona defensora recolectar la información necesaria para plantear una estrategia para la solución del conflicto, buscando el mejor resultado para la parte representada de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

**Programa 950:**

Con la finalidad de contribuir a un segmento de la población que durante bastante tiempo estuvo proscrito en el ámbito judicial como lo son las personas víctimas y testigos, en el 2009 entró en vigor la Ley 8720 “Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal” instrumento jurídico que vino a proteger y regular los derechos de la persona víctimas y testigos en el derecho penal costarricense.

Al aprobarse la citada normativa paralelamente se asignaron los recursos humanos y presupuestarios para la atención de los servicios de las personas víctimas y testigos; el programa presupuestario 950 “Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos” está conformado por la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (en adelante O.A.P.VD), y la Unidad de Agentes de Protección (en adelante U.P.R.O.V) éstas oficinas llevan a cabo una labor conjunta en apego a la legislación antes citada.

El servicio público que se brinda por medio del personal que labora dentro del Programa 950 contribuye a la misión institucional, procurando garantizar los derechos y participación de las personas víctimas y testigos de un delito en el proceso penal; labor que se ejecuta mediante un abordaje interdisciplinario, promoviendo un trato digno y en coordinación con otras instituciones. Además, cubriendo las necesidades económicas inmediatas urgentes que sufrió como consecuencia de un hecho delictivo o por su intervención en un proceso penal.

De acuerdo al registro de datos estadísticos el 2023 finalizó con 21.735 asuntos entre casos nuevos y reingresos de los cuales correspondían al Programa de Atención 12.475 y al Programa de Protección 9.260.

Por medio de la disciplina de psicología de la OAPVD se brindó el servicio de intervención psicológica y acompañamiento, ambos servicios fortalecen la participación de las víctimas y testigos en las distintas etapas del proceso penal, participación que contribuye a disminuir la impunidad, logrando así una mayor eficiencia en el sistema judicial.

Asimismo, con el objetivo de fortalecer el servicio de aquellas personas usuarias que se les dificultaba movilizarse a los Tribunales de Justicia para ser atendidas, se programaron y realizaron 4.156 visitas domiciliarias lo que contribuye al acceso a la justifica y robustece la credibilidad institucional.

**Programa 951:**

Cabe mencionar que, el programa *“951 Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”,* coadyuvó al fortalecimiento del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FJPPJ) de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable y que contribuye para que las personas afiliadas a este régimen del primer pilar del Sistema Nacional de Pensiones Costarricense (personas funcionarias activas, jubiladas y pensionadas) tengan un ingreso digno, al finalizar su etapa laboral, producto de su sana administración y se asegure su sostenibilidad en el tiempo. Por lo cual, con la gestión realizada en el periodo 2023, se siguió con el establecimiento de una estructura administrativa más robusta, especializada, dedicada y profesional para la correcta ejecución de la labora encomendada. Asimismo se continuó con la atención de proyectos operativos urgentes, relevantes e impostergables para la correcta administración del FJPPJ y sus personas afiliadas, objetivo primordial para lo cual fue creado este programa.

Por otra parte, esta gestión permitió por segundo año consecutivo administrar con probidad, compromiso, responsabilidad, excelencia e integridad los fondos provenientes de los diferentes aportes e ingresos que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece, para garantizar la sostenibilidad del régimen del FJPPJ y la seguridad social de las personas afiliadas a este, de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, en línea con los requerimientos del ente supervisor del mercado, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), las directrices del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y el marco normativo aplicable.

Adicionalmente, sobresale que, se brindó continuidad a los servicios relacionados con los elementos de un adecuado Gobierno Corporativo, se establecieron nuevos productos o mecanismos para mejorar los tiempos de respuesta para las personas afiliadas a este régimen jubilatorio principalmente en el área de tecnología y de servicio a la persona usuaria, de acuerdo con la normativa que regula y es aplicable al régimen del FJPPJ.

Finalmente, es importante recordar que, en comparación con el periodo 2022 (porcentaje de ejecución 69,07%) se logró mejorar la ejecución presupuestaria (porcentaje de ejecución 81,69%) con el fin de garantizar una correcta administración de los recursos que contribuye a los objetivos institucionales definidos para una adecuada gestión de la administración de justicia encargada por la Constitución Política a este Poder Judicial.

1. **En caso de que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del centro gestor con lo establecido en el PNDIP 2023-2026.**

En el caso del Poder Judicial, no se tiene vinculación directa con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2023-2026, no obstante, la institución ha elaborado un propio Plan Estratégico 2019-2024 (PEI).

A continuación, se detallan los logros obtenidos en el Plan Estratégico Institucional por programa:

**Programa 926:**

En el caso del Poder Judicial, no se tiene vinculación directa con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2023-2026, no obstante, la institución ha elaborado su propio Plan Estratégico 2019-2024 (PEI).

En el caso específico del Programa 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo, se contribuye de manera positiva al cumplimiento de este Plan Estratégico, mediante el logro de los objetivos y metas propuestos por las oficinas que componen el Programa; además, a través de la ejecución efectiva de los recursos presupuestados, con los que se impulsa el alcance de los proyectos estratégicos y se apoya los procesos de toma de decisiones. Algunas de las acciones y metas estratégicas realizadas por el programa en el 2023 se presentan a continuación:

* Desarrollo e implementación de estrategias para la efectiva gestión de los asuntos disciplinarios que contribuyan con el fortalecimiento de la ética en la institución.
* Implementación de estrategias definidas de capacitación y acciones en la regulación para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial.
* Mejorar los procesos de reclutamiento y selección para lograr mayor eficacia en el desempeño de funciones en los puestos de trabajo.
* Implementar el sistema integrado de evaluación del desempeño, que permita la mejora en el desempeño integral del personal judicial.

**Programa 927:**

En el caso del Poder Judicial, **no aplica** la vinculación directa con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2023-2026, en virtud de que la institución trabaja con su propio Plan Estratégico Institucional 2019-2024 (PEI).

Uno de los objetivos estratégicos del PEI establece *“Resolver conflictos de forma imparcial, célere y eficaz, para contribuir con la democracia y la paz social”*. Al respecto, se logró incrementar la resolución de casos, producto de la implementación y seguimiento de las acciones citadas en el punto “a.”, lo que a su vez permitió brindar una respuesta más oportuna a las personas usuarias.

**Programa 928:**

El programa 928 Organismo de Investigación Judicial del Poder Judicial no tiene vinculación directa con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2023-2026. Sin embargo, se cuenta con el Plan Estratégico institucional del Poder Judicial el cual está enfocado en contribuir con la paz social y lograr una sociedad que confíe en el servicio de justicia que se le brinda, por lo que, a través de la ejecución presupuestaria, se puede contribuir en gran manera en estos objetivos, ya que se tienen mejores equipos con pericias más acertadas y tiempos de respuesta más efectivos y una policía debidamente equipada que le permita enfrentar la criminalidad y brindar la paz social que toda sociedad requiere.

**Programa 929:**

Es importante acotar, que si bien el Poder Judicial no tiene vinculación con el PNDIP 2023-2026, si cuenta con un Plan Estratégico Institucional en el cual el Ministerio Público contribuye en el logro de sus objetivos.

En el caso del Programa 929 Ministerio Público, y según las metas establecidas en el Plan Estratégico, se formulan políticas de persecución penal y abordaje integral de la criminalidad, que sirven de guía para la orientación de la labor de las personas funcionarias, y así brindar una justicia pronta y cumplida.

Entre las acciones estratégicas desarrolladas en el periodo respecto al abordaje integral de la criminalidad, se redefinieron las políticas de persecución penal con base con base en los fenómenos criminales de mayor incidencia en el país y se diseñó el modelo de redistribución de casos según complejidad. Asimismo, se continuó con el plan para la descongestión y atención de rezago de expedientes.

Con respecto a la proyección institucional y la política de Participación Ciudadana del Poder Judicial, y alineado con la meta estratégica de mejora de la proyección y gestión de la Fiscalía General, se continúa con el plan Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas en el Ministerio Público, para lo cual se desarrolló e implementó una estrategia de rendición de cuentas y transparencia institucional, y se trabajó en la creación de un Ministerio Público Abierto, lo cual es congruente con la visión de medir resultados, rendir cuentas y aprovechar al máximo los recursos existentes.

Finalmente, es importante mencionar que se mantiene el fortalecimiento del nuevo modelo gerencial de trabajo por parte de la Fiscalía General, el cual está directamente relacionado con el plan estratégico institucional, estableciéndose el modelo de 5 columnas o ejes prioritarios, liderados por personas altamente calificadas para la atención de procesos estratégicos en temáticas de alto impacto social relacionadas al quehacer del Ministerio Público.

La estructura planteada inicialmente constaba de cuatro columnas. La primera corresponde a las Fiscalías Territoriales, enfocadas actualmente en la priorización de planes de descongestionamiento y gestión del rezago para disminuir los tiempos de resolución del Ministerio Público. La columna de Probidad unifica las áreas de transparencia, anticorrupción y probidad con la que se pretende combatir y castigar la corrupción en la función pública, promoviendo los más altos valores éticos en el desempeño de esta función. La tercera columna corresponde a Crimen Organizado, la cual propone la creación de políticas de persecución y unificación de objetivos de persecución penal. Y la cuarta columna dedicada a la atención de los delitos relacionados con poblaciones en condición de vulnerabilidad y vulnerabilizadas. Para este año 2023 se creó la quinta columna, enfocada en la capacitación y supervisión del personal, el cual es un eje transversal a toda la estructura del Ministerio Público, enfocada en la capacitación y formación por competencias laborales y profesionales de todo el personal fiscal y técnico de la institución, para mejorar las 6 habilidades y conocimientos del personal en el desempeño de sus funciones, acorde con las necesidades, valores y ejes institucionales.

**Programa 930:**

El Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial establece como misión “Administrar justicia pronta, cumplida y accesible, de conformidad con el ordenamiento jurídico para contribuir con la paz social, el desarrollo integral y sostenible del país”.

Los objetivos de la Defensa Pública se encuentran vinculados con este componente estratégico ya que permiten medir, en primera instancia, la capacidad que tienen la Defensa Pública para atender las distintas poblaciones que demandan el servicio; esto garantiza el acceso de las personas usuarias a una asesoría y presentación letrada en un proceso judicial de manera gratuita. La Defensa Pública se constituye como el enlace entre el aparato judicial y la persona usuaria, lo cual garantiza no solo el acceso, sino también garantiza a la parte representada una atención adecuada, que le permita desarrollar y preparar los alegatos para la defensa del conflicto que se quiere resolver en estrados judiciales.

Los objetivos a su vez están vinculados con los ejes transversales que impactan a la persona usuaria, estos son:

* Acceso a la justicia
* Valor del servicio de administración de justicia

**Para el Programa 950:**

***Contribución al Plan Estratégico Institucional***

Las leyes y las normas de convivencia son fundamentales debido a que regulan la vida en sociedad y establecen pautas que permiten a cada uno/a conocer sus derechos y deberes dentro de la misma; como consecuencia de la evolución social y sus cambios constantes, es necesario generar una evaluación de las políticas públicas y la legislación nacional, que impulse al mejoramiento de los servicios estatales acorde al tiempo de aplicación de los mismos, así como el ejercicio de los derechos de todas las personas.

Actualmente, el fenómeno criminal y la delincuencia han evolucionado, generando un crecimiento masivo de la criminalidad, así como las formas de comisión de delito tradicionales se sustituyeron por técnicas ilegales más sofisticadas y profesionales, con niveles alarmantes de violencia y con un notable crecimiento en la tasa de acciones ilícitas, lo cual tiene como efecto directo, la constante demanda del servicio que presta la Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito (OAPVD).

Es por lo anterior, que la Oficina de Atención y Protección incorporó dentro del Plan Estratégico Institucional la propuesta de reforma a la Ley 8720 Ley de Protección a Víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, así como la creación de reglamento para dicha ley, en el 2023 el equipo de trabajo de la OAPVD y UPROV trabajó en las propuestas antes indicadas con la finalidad de presentarla a instancia superiores para revisión, validación y aprobación, dicha reforma permitirá actualizar muchos artículos conforme las necesidades actuales lo que permitirá fortalecer el servicio público prestado.

Por otra parte, con la labor que se ejecuta diariamente desde la OAPVD y UPROV se contribuye a disminuir el riesgo y /o amenazas contra la vida o integridad física que puede generarse a una víctima o testigo a la participación en el proceso penal, es por esta razón que el servicio de atención y protección a víctimas aporta al fortalecimiento de la credibilidad en la administración de justicia y Estado de Derecho.

Finalmente, con el fin de contribuir al plan estratégico y a las estrategias de comunicación y proyección institucional desde programa 950 se gestionaron diversas charlas, se dio la participación en ferias de distintas comunidades, también se coordinaron entrevistas en radio y televisión a fin de dar a conocer los servicios de la OAPVD.

**Programa 951:**

En el caso del Poder Judicial, no se tiene vinculación directa con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2023-2026; no obstante, la institución elaboró su propio Plan Estratégico 2019-2024 (PEI), en el cual en el periodo 2023 se cumplió con el 100% de las metas asignadas al programa 951 “Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”. Se destaca que, asociado a este plan estratégico, se capacitó y se implementaron acciones que regulan la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés.

**Producción cuantificable:**

A continuación, se muestra la tabla con la metodología a utilizar para la definición de los rangos de cumplimiento.

**Tabla 1. Parámetros de cumplimiento**

|  |  |
| --- | --- |
| Parámetros de cumplimiento | Rango |
| Cumplimiento Alto (CA) | Mayor o igual a 90,00% |
| Cumplimiento Medio (CM) | Menor o igual a 89,99% o igual a 50,00% |
| Cumplimiento Bajo (CB) | Menor o igual a 49,99% |

* + 1. **Análisis de resultados de las unidades de medida de los productos**

A continuación, se presenta el cuadro con el cumplimiento de las unidades de medida al 31/12/2023.

**Programa 927 – Servicio Jurisdiccional**

**Cuadro 12. Cumplimiento de las unidades de medida**

927 Servicio Jurisdiccional

Al 31 de diciembre 2023



**Fuente**: Subproceso de Estadística, Dirección de Planificación del Poder Judicial.

/1 Esta información se obtiene del informe semestral.

Al 31 de diciembre de 2023 se registró una mayor cantidad de casos terminados con respecto a lo proyectado, dado que se finalizaron 604 108,00 expedientes de los 595 589,00 programados, lo que equivale a un 101,43% en el porcentaje alcanzado. Estos resultados se lograron a partir del esfuerzo realizado por el personal judicial en el cumplimiento de sus deberes, la formalización del teletrabajo como modalidad para la realización de las funciones por parte del personal, la utilización de los protocolos para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos, el seguimiento y control de la gestión realizada por los despachos, así como la implementación de proyectos institucionales enfocados en maximizar el resultado de la gestión de los despachos.

El siguiente cuadro presenta las unidades de medida con cumplimiento menor al 45,00% al 30/06/2023 y menor al 90,00% al 31/12/2023.

**Cuadro 13. Unidades de medida con cumplimiento menor al 45,00% al 30/06/2023 y menor al 90,00% al 31/12/2023**

927 Servicio Jurisdiccional

Al 31 de diciembre de 2023



**Fuente:** Subproceso de Estadística, Dirección de Planificación del Poder Judicial.

1/ Corresponde al número de factor indicado para el informe semestral.

2/ Corresponde a la acción correctiva indicada en el informe semestral.

3/ Se refiere a si la acción señalada en el informe semestral fue o no efectiva y las justificaciones.

4/Corresponde al número de factor que afectó el resultado al finalizar el año el cual podría ser igual o diferente al presentado al I semestre.

5/Se refiere a cómo los factores que se presentaron en el II semestre incidieron en el resultado obtenido.

Al respecto, no se identificaron unidades de medida con cumplimiento menor al 45,00% al 30/06/2023 y menor al 90,00% al 31/12/2023.

El siguiente cuadro presenta las unidades de medida con cumplimiento mayor al 45,00% al 30/06/2023 y menor al 90,00% al 31/12/2023, las cuales no requirieron acciones correctivas para el I semestre.

**Cuadro 14. Unidades de medida con cumplimiento mayor al 45,00% al 30/06/2023 y menor al 90,00% al 31/12/2023**

927 Servicio Jurisdiccional

Al 31 de diciembre de 2023



**Fuente:** Subproceso de Estadística, Dirección de Planificación del Poder Judicial.

1/Corresponde al número del factor.

2/Se refiere a cómo los factores que se presentaron en el II semestre incidieron en el resultado obtenido.

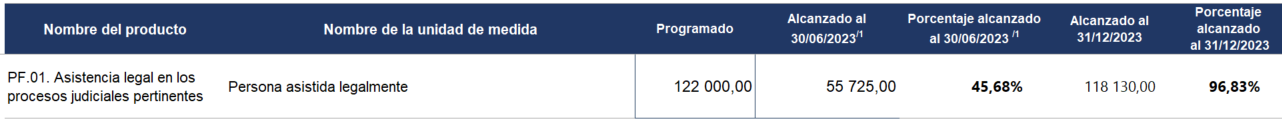
Al respecto, no se identificaron unidades de medida con cumplimiento mayor al 45,00% al 30/06/2023 y menor al 90,00% al 31/12/2023.

**Programa 930 Servicio de Defensa Pública**

**Cuadro 16. Cumplimiento de las unidades de medida**

930 00 Servicio Defensa Pública

Al 31 de diciembre 2023



**Fuente**: Oficina de Administración de la Defensa Pública, Libros de Registro General, Reportes SIGMA

/1 Esta información se obtiene del informe semestral.

Los reportados en el cuadro anterior, son los disponibles a la fecha en que se elaboró el presente informe, por lo tanto, los mismos pueden variar una vez concluidos los procedimientos de recopilación de los datos estadísticos para el 2023.

**Cuadro 17. Unidades de medida con cumplimiento menor al 45,00% al 30/06/2023 y menor al 90,00% al 31/12/2023**

930 00 Servicio Defensa Pública

Al 31 de diciembre de 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad de Medida** | **Factor al  30/06/2023 /1** | **Acción Correctiva /2** | **Razones /3** | **Factor al  31/12/2023 /4** | **Razones /5** |
| - | - | - | - | - | - |

**Fuente:** Oficina de Administración de la Defensa Pública, Libros de Registro General, Reportes SIGMA.

1/ Corresponde al número de factor indicado para el informe semestral.

2/ Corresponde a la acción correctiva indicada en el informe semestral.

3/ Se refiere a si la acción señalada en el informe semestral fue o no efectiva y las justificaciones.

4/Corresponde al número de factor que afectó el resultado al finalizar el año el cual podría ser igual o diferente al presentado al I semestre.

5/Se refiere a cómo los factores que se presentaron en el II semestre incidieron en el resultado obtenido.

El escenario previsto en el cuadro anterior no es aplicable para la Defensa Pública, ya que el seguimiento semestral superó el 45,00% de avance y el cierre al 31 de diciembre de 2023 registró un cumplimiento superior al 90,00%, por lo que no fue necesario la implementación de acciones correctivas.

**Cuadro 18.**  **Unidades de medida con cumplimiento mayor al 45,00% al 30/06/2023 y menor al 90,00% al 31/12/2023**

930 00 Servicio Defensa Pública

Al 31 de diciembre de 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unidad de Medida** | **Factor al  31/12/2023 /1** | **Razones /2** |
| - | - | - |

**Fuente:** Oficina de Administración de la Defensa Pública, Libros de Registro General, Reportes SIGMA

1/Corresponde al número del factor.

2/Se refiere a cómo los factores que se presentaron en el II semestre incidieron en el resultado obtenido.

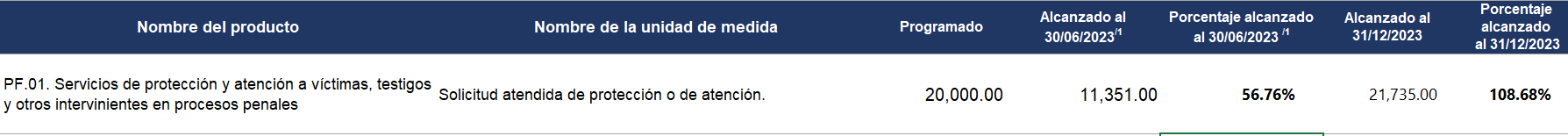
El escenario previsto en el cuadro anterior no es aplicable para la Defensa Pública, ya que el cierre al 31 de diciembre de 2023 registró un cumplimiento superior al 90,00%.

**Programa 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos**

**Cuadro 19. Cumplimiento de las unidades de medida**

950 00 Servicio de Atención y Protección a Víctimas y Testigos

Al 31 de diciembre 2023



**Fuente**: SIGMA (Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones del Poder Judicial)

/1 Esta información se obtiene del informe semestral.

El ingreso al programa de atención y protección es voluntario, la apertura de expedientes va de la mano con la aceptación de las personas usuarias a las medidas procesales y extraprocesales que indique el equipo interdisciplinario de acuerdo a lo señalado por la normativa 8720 Ley de Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal.

Para el 2023 la Oficina de Atención y Protección a Víctimas estableció como meta el trámite de 20.000 solicitudes de servicio, no obstante, se sobrepasó la meta en 1.735 asuntos.

Dentro de las razones que se consideran generaron un mayor ingreso de asuntos con respecto a lo proyectado se cita:

Incremento en los índices de criminalidad: la estadística en denuncias penales, en investigaciones, tiene un notable crecimiento a nivel país, por ello el nivel de riesgo sube, lo que hace que las personas acudan a la OAPVD.

Asimismo, para el 2023 fue posible dar a conocer el servicio de los despachos por medio de programas de radio, televisión, brindando charlas, lo que hace que el ciudadano informado acuda a solicitar los servicios.

**Cuadro 20. Unidades de medida con cumplimiento menor al 45,00% al 30/06/2023 y menor al 90,00% al 31/12/2023**

950 00 Servicio de Atención y Protección a Víctimas y Testigos

Al 31 de diciembre de 2023



**Fuente:** SIGMA (Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones del Poder Judicial)

1/ Corresponde al número de factor indicado para el informe semestral.

2/ Corresponde a la acción correctiva indicada en el informe semestral.

3/ Se refiere a si la acción señalada en el informe semestral fue o no efectiva y las justificaciones.

4/Corresponde al número de factor que afectó el resultado al finalizar el año el cual podría ser igual o diferente al presentado al I semestre.

5/Se refiere a cómo los factores que se presentaron en el II semestre incidieron en el resultado obtenido.

**Cuadro 21. Unidades de medida con cumplimiento mayor al 45,00% al 30/06/2023 y menor al 90,00% al 31/12/2023**

950 00 Servicio de Atención y Protección a Víctimas y Testigos

Al 31 de diciembre de 2023



**Fuente:** SIGMA (Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones del Poder Judicial)

1/Corresponde al número del factor.

2/Se refiere a cómo los factores que se presentaron en el II semestre incidieron en el resultado obtenido.

* + 1. **Análisis de los resultados de los Indicadores**

En el siguiente cuadro se presenta el cumplimiento alcanzado de los indicadores al 31/12/2023.

**Programa 927**

El Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión 29-2023 celebrada el 13 de abril de 2023 artículo XXXIII, acordó aprobar un ajuste al alza sobre las metas establecidas para las unidades de medida e indicadores definidos por la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda para el Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto.

Ahora bien, pese al ajuste mencionado, algunos resultados obtenidos al I semestre del 2023 mostraron resultados por encima del 100%; para lo cual, la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda mediante oficio n° MH-DGPN-DG-OF-0494-2023 indicó lo siguiente:

“En relación con los restantes 10 indicadores de gestión, estos muestran un promedio de cumplimiento del 88,89% respecto a la meta programada y algunas metas en particular alcanzaron un cumplimiento mayor a un 100,00%, por lo que se recomienda para estos casos particulares que se realice una revisión de las metas, con el fin de determinar si su logro se debe a la subvaloración de las metas establecidas y se propongan metas que presenten retos para la organización”.

Por lo anterior, el Consejo Superior en sesión 95-2023 celebrada el 14 de noviembre de 2023 artículo LII, al conocer el oficio n° 1237-PLA-EV-2023 de la Dirección de Planificación, relacionado con el oficio anteriormente citado, entre otros aspectos se acordó: 6 “2.) Se insta a los encargados de los Programas Presupuestarios del Poder Judicial, valorar las recomendaciones señaladas en el informe de la Dirección General de Presupuesto Nacional, con el propósito de mejorar la gestión institucional” (…). Conforme a lo anterior, se analizará la necesidad de realizar nuevos ajustes en los parámetros, con el fin de contar con metas que se ajusten adecuadamente a la realidad institucional. En el siguiente cuadro se presenta el cumplimiento de los indicadores al 31/12/2023.

**Programa 927 – Servicio Jurisdiccional**

**Cuadro 22. Cumplimiento de indicadores**

927 Servicio Jurisdiccional

Al 31 de diciembre 2023

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

**Fuente**: Subproceso de Estadística, Dirección de Planificación del Poder Judicial.

/1 Esta información se obtiene del informe semestral.

A continuación, se detallan las razones asociadas a los cumplimientos superiores al 100%.

* **PF.01.01. Porcentaje de expedientes judiciales finalizados respecto al total de asuntos ingresados al Programa de Justicia Restaurativa**

El porcentaje de expedientes judiciales finalizados en relación con lo ingresado al programa fue superior al proyectado, al alcanzar un 105,82% del 95,00% programado. Esto representó un cumplimiento alto del 111,39%; lo que contribuye a mejorar el servicio a la persona usuaria.

Entre los aportes se mencionan los siguientes:

1. La Justicia Restaurativa es un 86% más económica que el proceso penal ordinario. Lo anterior, se fundamenta en el informe N°2052-PLA-PP-2020, del 17 de diciembre de 2020, realizado por la Dirección de Planificación, sobre el costo que representa resolver un asunto vía Justicia Restaurativa versus su resolución por la vía ordinaria. Este informe fue aprobado por el Consejo Superior en sesión N°03-2021, celebrada el 12 de enero de 2021, artículo XL.
2. La promoción de prácticas restaurativas para la resolución de conflictos, desacuerdos o diferencias interpersonales, restaurando los daños ocasionados a la víctima, concientizando además a la persona ofensora, lo cual conduce a soluciones integrales y contribuye con la paz social.
3. Se aplica el *“Procedimiento de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativa”*, contemplado en la Ley 9582. Este mecanismo corresponde a una alternativa al encarcelamiento, tanto para resolver el conflicto judicial como para que la persona ofensora pueda atender su problema de consumo de drogas.
4. Las personas constituyen el centro del proceso judicial; por ende, se respeta la dignidad e igualdad de éstas.
5. Contribuye con la reducción del hacinamiento carcelario.
6. El Programa de Justicia Restaurativa se ha extendido a las materias de flagrancia y contravenciones.

Otro de los elementos que propiciaron el cumplimiento superior al esperado, correspondió a la implementación de la virtualidad en las reuniones, lo que ha permitió una reducción tanto en los tiempos de atención, así como en los costos de los traslados de las distintas personas que tienen participación en los procesos.

* **PF.01.02. Porcentaje de expedientes judiciales resueltos mediante medida alterna, respecto al total de asuntos ingresados al Programa de Justicia Restaurativa**

Los asuntos resueltos a través de medidas alternas reflejaron un nivel de cumplimiento alto del 101,55%, dado que se alcanzó un 53,82% del 53% programado; lo que significa que 53,8 de cada 100 asuntos que ingresaron al Programa de Justicia Restaurativa lograron finalizar con una medida alterna que puso fin al conflicto de una manera reparadora e integral.

Los asuntos finalizados a través del programa de Justicia Restaurativa propician menores costos para las personas usuarias y para la institución; así mismo, promueven una mayor satisfacción para las partes, tal como se indicó para el indicador PF.01.01, ya que obedece principalmente a la anuencia de las personas en que se aplicara una medida alterna como respuesta a la solución del conflicto planteado ante instancias judiciales.

* **PF.01.03. Tasa de resolución**

Al cierre del año 2023 la tasa de resolución alcanzó un 38,90% con respecto al 37,00% esperado, lo que refleja un nivel de cumplimiento alto del 105,14%. Estos resultados impactaron de manera positiva en las personas usuarias del servicio de administración de justicia que brinda el Poder Judicial, ya que representa una mayor cantidad de asuntos terminados con respecto a lo esperado.

Dentro de las razones que incidieron para el cumplimiento alto del indicador, destacan las siguientes: el esfuerzo y compromiso del personal que labora para la institución, la implementación de proyectos institucionales que contribuyeron con el aumento de asuntos finalizados, tales como como: el Programa de Justicia Restaurativa, la intervención de los Centros de Conciliación, el Programa de Reducción del Circulante, la implementación de proyectos institucionales enfocados en maximizar los resultados de la gestión de los despachos, la implementación de protocolos para la realización de audiencias a través de medios electrónicos en las diversas materias, así como el retorno a la normalidad posterior a la pandemia por COVID-19.

Otros aspectos están relacionados con los planes de descongestionamiento aplicados producto de diversas reformas implementadas a nivel institucional en materia laboral, civil y cobro; así como planes de descongestionamiento ejecutados en los despachos judiciales previo a la entrada en vigencia de las reformas agraria y de familia.

* **PF.01.04. Tasa de pendencia**

Para este indicador se alcanzó un 46,20% respecto al 47,08% esperado, lo que equivale a un nivel de cumplimiento esperado del 101,90%. Estos resultados resultan congruentes con la cantidad de asuntos finalizados durante el 2023.

* **PF.01.05. Cantidad de Asuntos Resueltos por Conciliaciones**

La cantidad de asuntos finalizados por medio de conciliaciones superó el parámetro esperado, al finalizarse un total de 46 873,00 asuntos, en relación con los 44 747,00 esperados, lo que representó un nivel de cumplimiento de 104,75%.

El cumplimiento de la meta más allá de lo proyectado obedece al esfuerzo realizado por la institución en promover la aplicación de la Ley N°7727 (Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social) en los despachos judiciales del país, como medida alterna de conflicto, aunado a la anuencia de las partes en lograr una solución en común acuerdo, sin la necesidad de una resolución impuesta. En línea con lo anterior, el Centro de Conciliación del Poder Judicial pone a disposición de las personas usuarias, un total de 10 sedes distribuidas en distintos circuitos judiciales del país.

Entre los beneficios que ofrece esta medida de solución alterna, se citan lo siguientes:

* Constituye un apoyo para la mitigación de los efectos del retardo judicial.
* Se pone a disposición de la persona usuaria una justicia más humana, accesible y célere para la solución de sus conflictos.
* Se promueve la paz social.
* Se promueven acuerdos más ajustados a la expectativa de las personas usuarias.
* Reducción de costos para las personas usuarias y para la institución.

El siguiente cuadro presenta los indicadores con cumplimiento menor al 45,00% al 30/06/2023 y menor al 90,00% al 31/12/2023.

**Cuadro 23.**  **Indicadores con cumplimiento menor al 25,00% al 30/06/2023**

**y menor al 90,00% al 31/12/2023**

927 Servicio Jurisdiccional

Al 31 de diciembre de 2023



**Fuente**: Subproceso de Estadística, Dirección de Planificación del Poder Judicial.

1/ Corresponde al número de factor indicado para el informe semestral.

2/ Corresponde a la acción correctiva indicada en el informe semestral.

3/ Se refiere a si la acción señalada en el informe semestral fue o no efectiva y las justificaciones.

4/ Corresponde al número de factor que afectó el resultado al finalizar el año el cual podría ser igual o diferente al presentado al I semestre.

5/ Se refiere a cómo los factores que se presentaron en el II semestre incidieron en el resultado obtenido.

**Cuadro 24. Indicadores con cumplimiento mayor al 45,00% al 30/06/2023 y menor al 90,00% al 31/12/2023**

927 Servicio Jurisdiccional

Al 31 de diciembre de 2023



**Fuente**: Subproceso de Estadística, Dirección de Planificación del Poder Judicial. 1/Corresponde al número del factor. 2/Se refiere a cómo los factores que se presentaron en el II semestre e incidieron en el resultado obtenido.

**Programa 930 Servicio de Defensa Pública**

**Cuadro 25. Cumplimiento de indicadores**

930 00 Servicio Defensa Pública

Al 31 de diciembre 2023

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente con confianza media

**Fuente**: Administración de la Defensa Pública, Encuesta anual de percepción del servicio

/1 Esta información se obtiene del informe semestral.

Los indicadores “Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo que le dedica la Defensora o Defensor Público” y “Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo de espera antes de ser atendido por la Defensora o el Defensor Público” se obtienen por medio de una encuesta a nivel nacional que se aplica a las personas usuarias de los servicios que brinda la institución. Dicha encuesta se aplica de manera anual, por tanto, no se tienen avances semestrales.

Por la condición de vulnerabilidad de las personas usuarias que atiende la Defensa Pública es imprescindible mantener tiempos de espera cortos, o razonablemente aceptables, ya que, por las características de la población, la institución ha ajustado los procedimientos en las oficinas para que las personas sean atendidas sin cita previa, dado que no se puede limitar la prestación del servicio a un requisito de este tipo.

Por otro lado, tiempos de espera largos, desincentivan a las personas usuarias a requerir los servicios de la Defensa Pública y pueden obligarlos a prescindir de asistencia letrada para la atención de su proceso o consulta, por cuanto no encuentran respuesta oportuna en la institución. Es así como el tiempo espera razonables, generan confianza en la población, pues están siendo escuchados y permiten mantener una adecuada atención.

Además, es imprescindible escuchar a la parte representada, ya que es necesario para la correcta representación del caso, ya que de eso depende el desarrollo de la estrategia de defensa. Lo anterior se consigue con tiempos de atención adecuados, de ahí la importancia de medir esta variable, ya que una parte del resultado del proceso depende de la interacción de la persona defensora con su representado.

Los indicadores “Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo que le dedica la Defensora o Defensor Público” y “Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo de espera antes de ser atendido por la Defensora o el Defensor Público” se miden de manera anual, por tanto, no se tienen avances semestrales.

El indicador “Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo que le dedica la Defensora o Defensor Público” se ubicó 0,78 puntos porcentuales por encima de lo programado. Según los resultados de la última encuesta, este resultado es empujado por la percepción que tienen las personas usuarias de los servicios que reciben en materia Pensiones Alimentarias y Laboral. Es importante indicar que, para estas materias en particular, la Defensa Pública ha realizado intervenciones en las oficinas para mejorar el servicio, especialmente la recepción de demandas nuevas, lo cual impacta directamente el tiempo de atención.

**Cuadro 26.**  **Indicadores con cumplimiento menor al 45,00% al 30/06/2023**

**y menor al 90,00% al 31/12/2023**

930 00 Servicio Defensa Pública

Al 31 de diciembre de 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Factor al  30/06/2023 /1** | **Acción Correctiva /2** | **Razones /3** | **Factor al  31/12/2023 /4** | **Razones /5** |
| - | - | - | - | - | - |

**Fuente**: Administración de la Defensa Pública, Encuesta anual de percepción del servicio

1/ Corresponde al número de factor indicado para el informe semestral.

2/ Corresponde a la acción correctiva indicada en el informe semestral.

3/ Se refiere a si la acción señalada en el informe semestral fue o no efectiva y las justificaciones.

4/ Corresponde al número de factor que afectó el resultado al finalizar el año el cual podría ser igual o diferente al presentado al I semestre.

5/ Se refiere a cómo los factores que se presentaron en el II semestre incidieron en el resultado obtenido.

El escenario previsto en el cuadro anterior no es aplicable para la Defensa Pública, ya que los indicadores “Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo que le dedica la Defensora o Defensor Público” y “Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo de espera antes de ser atendido por la Defensora o el Defensor Público” se miden de manera anual, por lo que no es posible estimar el indicador semestralmente.

**Cuadro 27. Indicadores con cumplimiento mayor al 45,00% al 30/06/2023 y menor al 90,00% al 31/12/2023**

930 00 Servicio Defensa Pública

Al 31 de diciembre de 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Factor al  31/12/2023 /1** | **Razones /2** |
| - | - | - |

**Fuente:** Administración de la Defensa Pública, Encuesta anual de percepción del servicio.

1/Corresponde al número del factor.

2/Se refiere a cómo los factores que se presentaron en el II semestre e incidieron en el resultado obtenido.

El escenario previsto en el cuadro anterior no es aplicable para la Defensa Pública, ya que los indicadores “Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo que le dedica la Defensora o Defensor Público” y “Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo de espera antes de ser atendido por la Defensora o el Defensor Público” se miden de manera anual, por lo que no es posible estimar el indicador semestralmente.

**Programa 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos**

**Cuadro 28 .Cumplimiento de indicadores**

950 00 Servicio de Atención y Protección a Víctimas y Testigos

Al 31 de diciembre 2023

Texto

Descripción generada automáticamente

**Fuente**: Controles estadísticos propios de la OAPVD y SIGMA (Sistema de Apoyo a la Toma de decisiones del Poder Judicial)

/1 Esta información se obtiene del informe semestral.

**PF 01 01:** De conformidad con lo que estipula La Ley 8720, “Ley de Protección a Víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal”, en su artículo primero, el principal objetivo es proteger los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, así como regular las medidas de protección extraprocesales y su procedimiento, dicha atención y protección se brinda a personas nacionales o extranjeras, que han resultado víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.

Es por lo anterior que desde el programa de protección de la OAPVD las personas profesionales de las distintas disciplinas (Trabajo Social, Derecho, Criminología, Psicología, Sociología. ) de forma conjunta analizan los casos y luego de realizar una entrevista con las personas usuarias que acuden al despacho o que se visitan al lugar donde se encuentren, se determina la existencia de un riesgo eminente que atente contra la vida y/o integridad física de éstos, debe definirse un plan de protección personalizado (Plan de Protección: se denomina plan de protección a las acciones o mecanismos que recomiendan los equipos técnicos interdisciplinario a las personas protegidas con el propósito de garantizar su vida e integridad física)para reducir el riesgo. El disminuir ese riesgo es factor relevante y además resulta una causal de exclusión definida en la ley 8720 en su artículo “12” inciso “d) 5”. Es por esa razón que resulta importante cuantificar los casos concluidos por la causal desaparición del riesgo, respecto al total de casos cerrados.

Para el 2023 de acuerdo con el dato estadístico el programa de protección terminó 9.246 expedientes, de los cuales 1.295 se excluyeron por desaparición del riesgo.

Razones que contribuyeron al alcance y superación de la meta:

* Elaboración de planes de protección efectivos
* Seguimiento al cumplimiento de las medidas extraprocesales otorgadas
* Desarrollo de visitas domiciliarias
* Estudios de seguridad realizados por profesionales en criminología

**PF 01 02:** El Programa de Atención de la OAPVD trabaja la intervención psicoterapéutica la cual es ejecutada por una persona profesional en psicología dicha intervención busca fortalecer los procesos emocionales afectados por el delito. Dentro del proceso es clave que las personas finalicen la intervención en el programa de atención, razón por la cual ha establecido esto como un objetivo dentro de sus planes de trabajo.

Al concluir 2023 se cerraron en el programa de atención 12.969 asuntos de los cuales 5.892 concluyeron la intervención.

Aspectos que justifican la superación del alcance del objetivo se encuentra:

* Se brindó acompañamiento a personas usuarios en diversas diligencias judiciales
* Desarrollo de Visitas domiciliarias
* Sesiones de Tele-psicología

**PF 01 03:** Las visitas domiciliarias del 2023 suman 4.156, la meta alcanzó más del 100% debido a que al momento de llevar a cabo las giras se programaron rutas que permitieron ejecutar varias visitas domiciliarias el mismo día. Aunado a ello se dio aumento de flotilla vehículo lo que contribuyó a maximizar las salidas.

**PF 01 04:** Resultó necesario ampliar la actividad presencial (monitorios) ante aspectos vinculante a los índices de criminalidad.

**Cuadro 29. Indicadores con cumplimiento menor al 45,00% al 30/06/2023**

**y menor al 90,00% al 31/12/2023**

950 00 Servicio de Atención y Protección a Víctimas y Testigos

Al 31 de diciembre de 2023



**Fuente**: SIGMA (Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones del Poder Judicial).

1/ Corresponde al número de factor indicado para el informe semestral.

2/ Corresponde a la acción correctiva indicada en el informe semestral.

3/ Se refiere a si la acción señalada en el informe semestral fue o no efectiva y las justificaciones.

4/ Corresponde al número de factor que afectó el resultado al finalizar el año el cual podría ser igual o diferente al presentado al I semestre.

5/ Se refiere a cómo los factores que se presentaron en el II semestre incidieron en el resultado obtenido.

**Cuadro 30. Indicadores con cumplimiento mayor al 45,00% al 30/06/2023 y menor al 90,00% al 31/12/2023**

950 00 Servicio de Atención y Protección a Víctimas y Testigos

Al 31 de diciembre de 2023



**Fuente:** SIGMA (Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones del Poder Judicial)

1/Corresponde al número del factor.

2/Se refiere a cómo los factores que se presentaron en el II semestre e incidieron en el resultado obtenido.

## **Anexos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Programa Presupuestario** | **Anexos Apartado Gestión** |
| **1** | Programa 926- Dirección y Administración |  |
| **2** | Programa 927 - Servicio Jurisdiccional |  |
| **3** | Programa 928- Servicio de Investigación Judicial |  |
| **4** | Programa 929- Servicio Ejercicio de la Acción Penal Pública |  |
| **5** | Programa 930- Servicio de Defensa Pública |  |
| **6** | Programa 950- Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos |  |
| **7** | Programa 951- Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial |  |

*Este informe cuenta con las revisiones y ajustes correspondientes de las jefaturas indicadas.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFORME** | **NOMBRE** | **PUESTO** |
| **Elaborado por:** | Licda. Karla Calvo Jiménez  Licda. Alejandra Morales Vargas | Profesional 2  Profesional 2 |
| **Revisado y Aprobado por:** | Inga. Elena Gabriela Picado González | Jefa a.i. Subproceso de Evaluación |
| **Visto Bueno:** | Máster Erick Antonio Mora Leiva | Jefe Proceso Planeación y Evaluación |
| Ing. Allan Pow Hing Cordero | Director Dirección de Planificación |

1. Los factores definidos por la DGPN son los siguientes:

   * 1. Aplicación de directrices presidenciales (especifique)
     2. Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.
     3. Políticas administrativas institucionales que ocasionen cambios en la ejecución de recursos y generen ahorros o mayor gasto.
     4. Variación en la estimación de recursos.
     5. Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
     6. Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
     7. Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2023.
     8. Liberación de cuota insuficiente.
     9. Otros (Especifique).

   [↑](#footnote-ref-2)